

Referéndum de reconciliación nacional. Argelia 2005

Balance

Rafael Bustos

Investigador invitado

Institut de recherches et d'études sur le Monde arabe et musulman (IRE-MAM) - CNRS, Aix-en-Provence

Med. 2006

A comienzos de 2005 se respiraba un cierto optimismo en Argelia y en las cancillerías occidentales acerca de las reformas puestas en marcha por el Gobierno argelino. Durante este año ha ido tomando forma uno de estos proyectos, la Carta por la paz y la reconciliación nacional, sometida a referéndum el 29 de septiembre y que pretende dejar atrás uno de los conflictos civiles más graves desde el final de la Guerra Fría.

Al principio, cautela y escepticismo

Desde el inicio del año se especulaba con el proyecto de reconciliación nacional que sería propuesto por la Presidencia. La cautela, por no decir el secreto, sobre su contenido iba a la par con el rechazo que suscitaba la idea de una amnistía general, posible esencia del proyecto. Entre las personas no afectadas directamente, predominaba la indiferencia ante una nueva tentativa legal, de la cual no se veían grandes diferencias con la primera de 1999, la Ley de concordia civil.

Paralelamente, el Gobierno presentaba los resultados de la comisión de investigación sobre los desaparecidos, la Comisión Ksentini. Esta comisión emitió un informe reconociendo un total de 6.146 desaparecidos. Sin embargo, estas desapariciones no se consideran obra deliberada del Estado sino exacciones de algunos individuos por el des-

bordamiento de la línea de mando que no dan lugar a responsabilidad estatal.

En una mejorada situación securitaria y financiera

Por otra parte, continuaron las reformas económicas e institucionales para mejorar la gobernanza y crecieron rápidamente las reservas de divisas (de 40.000 millones de dólares en enero a 60.000 millones a finales de este año). Unas reservas que permitieron al presidente Butefflika anunciar un plan quinquenal de relanzamiento económico, dirigido a la modernización de la agricultura, de las infraestructuras y del tejido económico. La situación securitaria había mejorado en dos frentes. A comienzos del año se había anunciado el desmantelamiento de uno de los grupos terroristas islamistas, el Grupo Islámico Armado (GIA) y la desarticulación parcial del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC). Al mismo tiempo que decrecía la violencia, sectores del movimiento de los Arouch –un movimiento de protesta creado a raíz de la muerte en comisaría de un joven de Kabília en abril de 2001– llegaban a un nuevo acuerdo con el Gobierno.

Aceleración

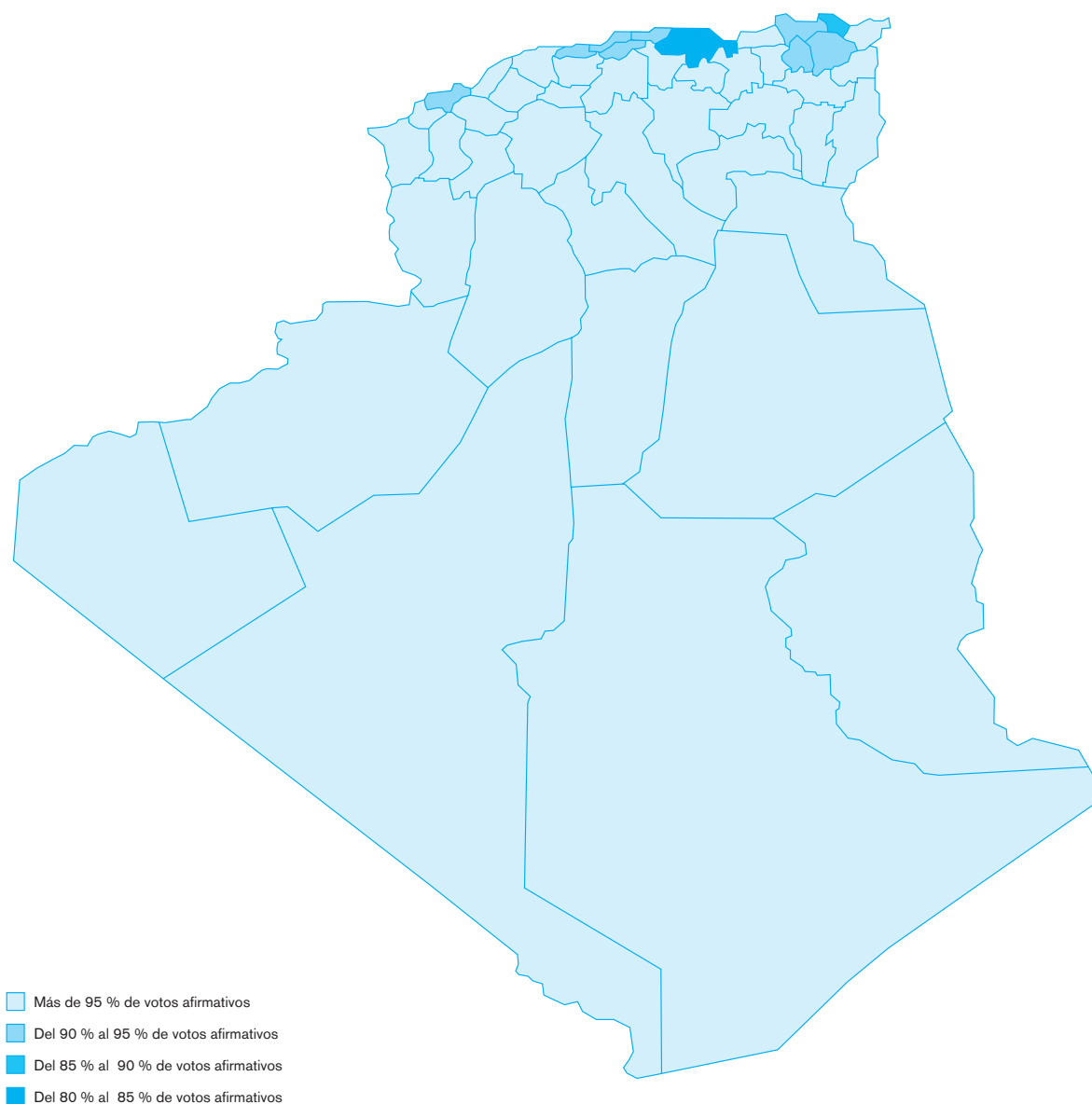
Con respecto al referéndum, el desenlace fue rápido a partir del verano. Se dio a conocer el plan de reconciliación nacional y en el mismo decreto presidencial del 14 de agosto, publicado con toda celeridad al día siguiente en el Boletín Oficial, el Presidente convocó un referéndum nacional para decidir sobre el asunto. El plazo concedido

para la reflexión y el debate fue breve, citando a los ciudadanos el día 29 de septiembre.

La campaña

La campaña oficial a favor del sí fue simplificada empleando el eslogan «De la concordia a la reconciliación nacional. Por Argelia». Transmitió básicamente la idea de que no había alternativa a la Carta (vid. Laurence Thieux, *La carta para la reconciliación nacional en Argelia*. 5 de octubre de 2005 www.iecah.org). Sin embargo, las fuerzas sociales y políticas que se oponían al texto no fueron capaces de comunicar adecuadamente los argumentos del «no». Una de las pocas excepciones fue un comunicado firmado por una lista de personalidades aparecido en la prensa argelina. El Presidente alcanzó en cambio a organizar sucesivos mítines en 10 de las *wilayas* más pobladas del país.

El bajo tono del debate durante la corta campaña favoreció igualmente que el Presidente y el Gobierno utilizaran hábilmente la polémica ley de la memoria histórica francesa para confortar el sentimiento nacional y ganar simpatías. En febrero, la aprobación en Francia de una polémica ley sobre los repatriados, que evoca los *aspectos positivos de la colonización* y su enseñanza, provocó una viva indignación en Argelia, como en otras ex colonias francesas y territorios de ultramar. Las autoridades argelinas exigieron reiteradamente la retirada del texto como condición previa a la firma del anunciado Tratado de Amistad franco-argelino. Una aprobación prevista para 2005 y que tendrá que esperar, cuanto menos, en 2006.



Fuente: Ministerio del Interior, www.referendum-reconciliation.dz/français/resultfr.htm

¿Es una amnistía o no?

La amnistía consiste en perdonar una parte o la totalidad de una pena o dejar de perseguir un delito, normalmente político, beneficiando a un sector de la población debido a un cambio de circunstancias, por ejemplo el fin de una guerra o el cambio de régimen. Ahora bien, en el caso de Argelia encontramos que son amnistiados otros delitos junto a los políticos, o incluso otros delitos más que los políticos. Tampoco concurrir un cambio de circunstancias especial, a menos que forzando las cosas

contemos como tal el descenso de la violencia. Por último, la Carta argelina no lleva por nombre ni menciona la palabra amnistía, aunque jurídicamente contiene disposiciones amnistiando delitos políticos y penales. ¿Por qué? En parte, porque es un término que suscita rechazo y, en parte, porque la ley busca el equilibrio exonerando a las fuerzas de seguridad de sus responsabilidades colectivas e individuales. Una exoneración que se sale del marco habitual de una amnistía.

Varias objeciones legales han sido planteadas a la Carta. De acuerdo

con el derecho nacional argelino, antes de una amnistía debería haber previamente una calificación jurídica de los hechos, seguido de un proceso judicial contradictorio en el cuál se dicte sentencia por lo menos simbólica (vid. Daho Djerbal, *Le référendum du 29 septembre 2005 pour la paix et la réconciliation. Un double déni*, 3 octubre 2005; versión inglesa en www.mafhoum.com/press9/253P1.htm). Conforme a la práctica internacional, las organizaciones internacionales (AI, HRW, etc.) sostienen que los procesos de amnistía no pueden impedir la

divulgación de la verdad ni la responsabilidad de que el Estado realice investigaciones judiciales en caso de violaciones graves de los derechos humanos (L. Thieux, op. cit).

Contenido de la Carta por la paz y la reconciliación nacional

La Carta se divide en cinco partes además del prólogo, que son, a modo de equilibrio: 1) reconocimiento de las fuerzas de seguridad y su trabajo, cláusula de garantía o protección de esas instituciones (nadie está autorizado a instrumentalizar heridas contra instituciones de la república o dañar la honorabilidad de sus agentes), 2) medidas de consolidación de la paz, 3) medidas de reconciliación nacional, 4) medidas relacionadas con los desaparecidos y 5) medidas que refuerzan la cohesión nacional.

La Carta de reconciliación es más amplia que la Ley de concordia civil, ya que reduce los casos de exclusión de 4 a 3 y amplía las disposiciones de amnistía o beneficios penales. Además, como hemos dicho, la Carta introduce apartados sobre las fuerzas de seguridad, medidas socio-económicas, políticas y de orden moral como el llamamiento al perdón individual.

Uno de los elementos no plasmados directamente en esta Carta de reconciliación es el desarme de las milicias locales (Grupos de Legítima Defensa, GLD) que operan en todo el país y que suponen un peligro para la pacificación definitiva. Asumen tareas que el Estado no debió nunca delegar y han sido justificados porque desempeñan, entre otras, misiones de autodefensa de aldeas aisladas. Su desmantelamiento fue anunciado como elemento de refuerzo

a la reconciliación, pero está pendiente del desarrollo de los textos de aplicación.

Los resultados

La pregunta del referéndum fue planteada de la siguiente manera: «¿Está usted de acuerdo o no con el proyecto de Carta por la paz y la reconciliación nacional que le ha propuesto el Gobierno?» Con un 79,76 % de participación, el porcentaje oficial de votantes a favor de la Carta por la paz y la reconciliación fue del 97,36 %. Sólo en cinco circunscripciones electorales de un total de 49 el porcentaje de votos en contra superó el 5 %: Oran, Constantina, Annaba, Argel y la circunscripción que forman los electores argelinos en el extranjero, y en dos sobrepasó el 10 %: Tizi Uzu y Beyaia (pequeña Kabilia). Sin embargo, otras informaciones no oficiales tomadas a pie de urna por varios periodistas indican una participación mucho menor y la utilización de viejas tácticas que se creían desterradas de los colegios electorales. Una de las corresponsales argelinas autorizadas observó en uno de los colegios de la capital una asistencia a las urnas inferior al 25 % y fue obligada a abandonar el lugar cuando se producía el recuento de papeletas (vid. Meriem Ouyahia, *Le Soir de l'Algérie*, 30 septiembre-1 octubre, 2005, p. 4). Lo cierto es que en esta ocasión y a diferencia de las presidenciales de 2004 no hubo observadores internacionales en el referéndum.

Eficacia y consecuencias de la Carta

Parece claro que el cansancio de la población se ha traducido en una baja par-

ticipación real y en un «sí» generalizado a la salida de la violencia. Ésta descansa, según la Carta aprobada, en la voluntad de entregarse de los maquis restantes (básicamente el GSPC), pero éste ya ha anunciado su rechazo al proyecto. Es cierto, no obstante, que podrían producirse deserciones individuales o parciales. O también la derrota definitiva de un grupo armado que no sólo está en la lista de organizaciones ligadas a Al Qaeda sino que además ha amenazado con atentar en Francia, por lo cuál sufrirá sin duda un acoso particular.

La parte negativa de la Carta es que, si bien prevé indemnizaciones y ayudas a las víctimas, cierra la puerta a la clarificación y al procesamiento judicial de los responsables de matanzas y desapariciones, impidiendo a los familiares el acceso elemental a la información sobre el paradero de sus seres queridos. Es pronto de todos modos para valorar el impacto de la medida. La Carta requerirá reglamentos de aplicación como lo requirió en su día la Ley de concordia civil aprobada en 1999. Y establecerá seguramente períodos de carencia y de validez de los beneficios penales. En cualquier caso conviene recordar una reflexión de un antropólogo argelino que invita a la prudencia. «El perdón, a diferencia de la amnistía, no puede ser decretado. Es un acto individual que implica reconocimiento y la posibilidad de castigar. Requiere un esfuerzo de la memoria —no para olvidar sino para renunciar a ajustar cuentas— y en ese esfuerzo las referencias colectivas de la memoria pueden facilitar u obstaculizar el proceso» (vid. Abderrahmane Moussaoui, *Pertes et fracas. Une décennie algérienne meurtrière, Naqd. Revue d'études et de critiques sociales*, Autumn/Hiver 2003, n.º 18, pp. 133-150).